



NUE 80-ADP-2018 (AG)

[Redacted] contra la Dirección General de Centros Penales
Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las trece horas con dieciocho minutos del tres de diciembre de dos mil diecinueve.

A. Descripción del Caso

I. El apelante **[Redacted]**, en adelante el apelante, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: suprimir de su certificación de antecedentes penales la palabra "cancelado" por "no tiene". El delito por los que fue rehabilitado es: "tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego".

En relación con ello, la oficial de información de la **DGCP** resolvió denegar dicha petición, con base al Art. 110 numeral 2) del Código Penal (CP), un efecto de la rehabilitación, "es la cancelación de antecedentes penales en el Registro de condenados que lleve el organismo correspondiente". Asimismo, el Art. 112 inciso tercero de ese Código, establece "en los casos de cancelación o caducidad de los registros, el antecedente penal que consta no se tendrá en cuenta para ningún efecto, si se solicitan certificaciones de éstos, **se deben hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias**". (Las negritas son nuestras).

II. El apelante interpuso recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose al Comisionado Hernán Alexander Gómez Rodríguez para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución; sin embargo, al finalizar su periodo el caso fue reasignado al Comisionado Andrés Gregori Rodríguez. Asimismo, se requirió a la DGCP que rindiera informe justificativo.

III. En su informe justificativo la DGCP a través de su apoderada expresó que con la finalidad de solventar los inconvenientes que causa a los usuarios consignar la palabra cancelado



caducado en su certificación de antecedentes penales la DGCP en coordinación con este Instituto, creó un procedimiento para la emisión especial de la certificación de antecedentes penales, por medio del cual se establecen criterios a valorar para la extensión de dicha certificación con la palabra “no tiene”, ya que al consignar las palabras cancelado o caducado, ocasiona un perjuicio laboral, social, económico o educativo, a las personas que fueron condenadas por algún tipo de delito y que ya fueron rehabilitadas en sus derechos de ciudadano.

En ese sentido, agregó la DGCP se encuentra trabajando en la preparación administrativa e informática, para iniciar con la implementación de la nueva política de emisión de las Certificaciones de Antecedentes Penales

A efecto, de probar sus argumentos incorporó prueba documental consistente en: “copia certificada de la resolución UAIP/OIR/00030/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública y copia certificada del documento de Procedimientos para la Emisión de la Certificación de Antecedentes Penales”.

IV. La audiencia oral relacionada con el presente caso, se señaló a las once horas del 2 de octubre de este año; sin embargo, ninguna de las partes compareció pese a haber sido notificadas en legal forma.

B. Análisis del Caso.

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) una breve referencia al derecho a la protección de datos personales y en específico al derecho de cancelación y el principio de confidencialidad; (II) análisis de la prueba aportada por las partes; (III) consideraciones sobre los antecedentes penales que registran las personas condenadas y rehabilitadas; (IV) se analizará la procedencia de la pretensión del apelante conforme al análisis de las normas legales pertinentes.

I. A. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre

tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros¹.

Por su parte, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en: *"la facultad que tiene una persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante"* (la negrita es nuestra). C.C

Al respecto, la Sala de lo Constitucional en la sentencia definitiva de amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales, es el medio por el cual se salvaguardan los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—, lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar. J.C. 6

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de cancelación o supresión (Art. 36 letra "d" de la LAIP), que de acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional es la facultad que se otorga a un individuo para que solicite la eliminación de sus datos de carácter personal de las bases que tenga un ente determinado, *"por la falta de relevancia y actualidad de la información para los fines que fueron recabados o, simplemente, por el propósito de permitir al titular que recupere la disponibilidad sobre cualquier faceta de su personalidad y de su datos íntimos o estrictamente privados"*².

¹ Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI). en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017. de referencia RRA 3995/16.

² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.



En ese contexto, como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a **borrar, bloquear o suprimir esa información personal**, que de alguna manera afecta el **libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales**, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como **información obsoleta**, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella **después de mucho tiempo**, y ya no sirve a los **fin**es para los que fue recabada (principio de finalidad).

C. Ahora bien, en la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional del 8 marzo de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 58-2007, se aclaró que el derecho a la autodeterminación informativa (o protección de datos personales), -que comporta diferentes facultades de controlar sobre el uso de la información personal que le atañe, tanto en su recolección como en su tratamiento, conservación y transmisión-, no es ilimitado. Las personas individuales o colectivas carecen de derechos fundamentales absolutos sobre sus datos. Esta es la razón por la que el individuo debe tolerar límites a ese derecho, en razón de un interés general.

Del mismo modo, se acotó que las restricciones o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, la cual debe ser legítima (constitucional o legal), explícita y determinada. Para ello, el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringido por el poder público cuando sea indispensable para la protección del interés general. Y es que la fuerza obligatoria del derecho constitucional se manifiesta, en primer lugar, en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución.

D. Es importante señalar que el derecho a la protección de los datos personales se encuentra informado por una serie de principios, en el que resalta para el caso en concreto: el principio de confidencialidad (Art. 36 letra “d” de la LAIP).

Este se define como la obligación del responsable del registro de las bases de datos, de establecer controles o mecanismos para quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los

datos personales a fin de que mantengan y respeten el secreto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular de los datos personales³.

En adición a este principio, se encuentran algunos métodos preventivos para salvaguardar la identidad, circunstancias o situaciones en las que una persona individual o jurídica se encuentra inmersa, por ejemplo, las reglas de anonimización, las cuales funcionan para facilitar el procesamiento de datos personales, pero a la vez para proteger al individuo de un seguimiento de sus datos mediante la asignación automática de características que lo permitan individualizar.

También, se encuentra el bloqueo de los datos personales, que es el método que tiene como fin impedir su ulterior tratamiento o disposición, produciendo efectos similares al borrado físico de los mismos; esto procede cuando existe una imposibilidad técnica como por causa del procedimiento o soporte utilizado, también cuando una norma legal ordena la conservación de los datos personales y otorga únicamente su disposición a las autoridades públicas conforme a sus atribuciones y competencias, impidiendo que terceros tengan acceso a esos datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, salvo que sean necesarios para garantizar razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

II. Análisis de la prueba aportada por las partes:

En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes; es decir, constituye una actividad a instancia de parte que tiene como finalidad la comprobación de los hechos controvertidos en el litigio y es contemplada en el derecho común como un derecho y a la vez como una carga.

La prueba, se encuentra regida por los principios de pertinencia, idoneidad, o contundencia y utilidad. Estos principios representan una limitación al principio de libertad de la prueba; sin embargo, son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan, en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente impertinentes.

En ese contexto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme al Art. 102 de la LAIP, contempla dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y utilidad. En cuanto

³ Disposición 23, de los "Estándares de Protección de Datos Personales" emitidos por la Red Iberoamérica de Protección de Datos, en Santiago de Chile, Junio 2017.



a la pertinencia el Art. 318 del CPCM, establece que no debe admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el Art. 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.

En ese sentido, la DGCP a través de su apoderado en su informe justificativo ofreció prueba documental consistente: “1) copia certificada de resolución UAIP/OIR/00030/2019, de fecha 18 de febrero de 2019, emitido por la Unidad de Acceso a la Información Pública; y, 2) copia certificada del documento de procedimientos para la emisión de la certificación de antecedentes penales”, conforme a lo establecido en el Art. 317 del CPCM, se tiene por recibida y admitida, la documentación antes relacionada debido a que esta guarda relación con el objeto de la controversia.

III. Establecido lo anterior, es pertinente mencionar que los antecedentes penales son datos que indican que una persona tiene registrada una condena sobre el cometimiento de conductas tipificadas en el vigente Código Penal y en otras normas de igual naturaleza.

A. En el caso de nuestro país, dichos antecedentes son registrados en el Sistema de Registro de Antecedentes Penales (SIRAP), a cargo de la DGCP, la cancelación de éstos, de acuerdo al Art. 110 numeral 2º del CP, se da por efecto de la rehabilitación⁴; y caducan al año de extinguida la pena, cuando los antecedentes tienen dicha calidad, y se soliciten certificaciones, se hará constar dichas circunstancias en ambos casos (Art. 112 inc. 3º del CP).

De lo anterior se colige que al interpretar dicha norma⁵, el legislador creó dos tipos de antecedentes penales, unos activos y otros pasivos; estos últimos los componen aquellos que fueron cancelados por la rehabilitación o por la caducidad por efecto del mero transcurso del tiempo una vez extinguida la pena.

⁴ Luego de la aplicación al condenado del régimen jurídico personal fijado en la sentencia, por tanto tiempo como se defina en cada caso, pero sin sobrepasar los máximos señalados en la Constitución y la ley, se supone que la persona ha sido reeducada para la vida en comunidad o, al menos, se puede afirmar que cumplió con las cargas que legítimamente tasó y le impuso el juez competente y, sea que su resocialización se haya logrado o no, el poder punitivo del Estado se agotó para con esa persona y por los hechos que sirvieron de sustento a la condena. Así, la persona tiene, entonces, derecho a reincorporarse a la vida comunitaria en igualdad de derechos con los demás (Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia de referencia No. T-218/94).

⁵ Interpretar una norma es una operación cognoscitiva a través de la cual se busca desentrañar su espíritu y significado; esto no puede realizarse de forma abstracta o aislada, sino integrada en el contexto del cuerpo normativo a que pertenece, de manera sistemática. Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo del día 11 de julio de 2003, en el proceso de legalidad de referencia 181-A-2001.

B. De conformidad con el Art. 36 letra "d" de la LAIP, los titulares de los datos podrán solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y **toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial**. En ese sentido, dicho procedimiento, no le es aplicable para cancelar los antecedentes penales activos, ya que el CP ha establecido un procedimiento especial para dicho efecto, que es por medio de la rehabilitación (Art. 110 numeral 2°).

Ahora bien, respecto a los antecedentes penales **pasivos** (caducados o cancelados), el CP no establece ningún tipo de procedimiento para la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información, tampoco el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria señalan nada al respecto, por lo que le es aplicable lo establecido en los Arts. 36 letra "d" en relación al 7 de la LAIP. Asimismo, sobre la confidencialidad de la información conforme al Art. 24 letra "b" de la Ley, aplicando la heterointegración normativa.

En ese sentido, este Instituto tiene la competencia legal para conocer y determinar conforme al Art. 29, 83 letra "a" y 96 letra "d" de la LAIP, sobre lo peticionado por el apelante. Asimismo, posee la competencia de velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP conforme a su Art. 58 letra "a"; además, interpretar las normas a la luz de la Constitución, actitud que se exige no sólo para entes jurisdiccionales, sino de manera general para todo funcionario de acuerdo a la jurisprudencia contenciosa administrativa⁶ y en aplicación al Art. 235 de la Cn.

IV. Una vez determinado lo anterior, corresponde analizar la pertinencia de la supresión del dato negativo del apelante, en su certificación de antecedentes penales cambiando la palabra cancelado por "no tiene".

En su resolución la oficial de información de la **DGCP**, resolvió denegando la solicitud del apelante, conforme a lo dispuesto en el Art. 112 inc. 3° del CP, que indica: "en los casos de cancelación o caducidad de los registros, el antecedente penal que consta no se tendrá en cuenta para ningún efecto; si se solicitan certificaciones de éstos, se deben hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias".

No obstante lo anterior, en su informe justificativo la **DGCP** a través de su apoderada manifestó que la institución se encuentra trabajando en la preparación administrativa e informática, para la implementación de la normativa denominada: "Procedimientos para la Emisión de la

⁶ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 27 de junio de 2000, en el proceso de legalidad de referencia 157-M-99.



Certificación de Antecedentes Penales”; dicho documento con la finalidad de solventar el inconveniente que ocasiona consignar la palabra “cancelado” o “caducado” en las certificaciones de antecedentes penales solicitadas por personas que fueron condenadas por la comisión de algún tipo de delito pero que también han cumplido su pena y fueron rehabilitadas en sus derechos de ciudadano.

La normativa antes relacionada en su numeral 4), regula: “todas aquellas solicitudes de certificación de antecedentes penales cancelados o caducados, acerca de los registros posteriores al 20 de abril de 1998, que requiera el titular o en su defecto la persona que acredite legalmente la personería con la que actúa para fines laborales o educativos, se extenderá con la palabra “no tiene” bajo los criterios siguientes: 4.1) cuando ha cumplido la pena principal, por una condena igual o menor a tres años o en los casos cuya condena no ha sido la pena de privación de libertad, siempre y cuando se encuentren rehabilitados sus derechos de ciudadano”.

En ese sentido, existiendo evidencia en el expediente relacionado con el presente caso, que el apelante fue condenado a tres años de prisión por la comisión del delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego, que se le concedió el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo igual, el cual cumplió el 11 de abril de 2018; y que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Vicente le rehabilitó en sus derechos de ciudadano el 18 de mayo de ese mismo año; se advierte que le es aplicable el supuesto relacionado en el párrafo que antecede.

En consecuencia, es pertinente revocar la resolución de la oficial de información de la **DGCP**, en el sentido que proceda al bloqueo y confidencialidad del dato negativo del apelante por el delito tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y disparo de arma de fuego, en su certificación de antecedentes penales cambiando la palabra “cancelado” por “no tiene”, en atención a lo dispuesto en la normativa denominada: “Procedimientos para la Emisión de la Certificación de Antecedentes Penales”, debido a que la petición del apelante sobre la supresión de su antecedente penal en su certificación de antecedentes penales es para trámites de empleo.

C. Decisión del Caso,

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94.96 letra “b” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve:**

a) **Revocar** la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)**, el 22 de junio de 2018, .

b) Ordenar a la DGCP a través de su oficial de información, que dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución revoque la resolución objeto de la controversia en los términos dispuestos en la normativa "Procedimientos para la Emisión de la Certificación de Antecedentes Penales", suprimiendo la palabra "cancelado" por "no tiene" en la certificación de antecedentes penales de [REDACTED] para tramites de empleo.

d) Ordenar a la DGCP que, en el plazo de veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, que incluya algún registro en el que conste la documentación entregada el apelante así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique su ejecución.

e) Publíquese esta resolución, oportunamente.

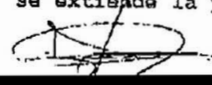
Notifíquese.-

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

CT/JC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.


[REDACTED]
NOTIFICADOR
IAIP



